RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CINCUENTA CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Rad No. 27-2013-00708

Pasa el Juzgado a decidir el recurso de reposición formulado por la liquidadora en contra de las decisiones adoptadas en los numerales 2, 3, 5, 6 y 8 del auto del 22 de febrero de 2022.

EL RECURSO

Indica que no resulta viable ordenar a la Secretaría elaborar y publicar nuevamente el aviso, puesto que como se observa en el archivo digital No 17 esta labor ya se efectuó en debida forma, por lo que no hay lugar a repetirla, por lo que debe dejarse sin valor la orden contenida en el numeral 2, puesto que esto lo que genera es un retraso del proceso.

En cuanto al numeral 3, refiere que esta decisión no tiene fundamento si en cuenta se tiene que en ningún aparte del auto del 26 de enero de 2021, se ordenó al liquidador registrar la corrección del trámite en Cámara de Comercio, y menos aún se ordenó a la Secretaría la elaboración de con ese destino.

Respecto a los numerales 5 y 6, indica que los requerimientos allí efectuados so pena de dar aplicación a la sanción por desistimiento tácito con apoyo en lo previsto en el art. 317 del CGP, no tiene fundamento alguno para esta clase de proceso y contraría todo lo que al respecto ha dicho la jurisprudencia sobre el tema. Señala que debe hacerse un control de legalidad en punto a la decisión adoptada de vincular al trámite al acreedor hipotecario William Vega Silva, pues esto contraría las disposiciones de la ley 1116 de 2006, a lo que se suma que aquel no quedo reconocido en su momento en el acuerdo de reorganización por lo que no podría hacerse parte en este momento procesal.

Finalmente dice que el numeral 8 debe ser reformado, al estimar que es la forma en como en la ley 1116 de 2006 se encuentra regulados como deben establecerse y pagarse los honorarios del liquidador, por lo que mal viene aplica otras reglas, de ahí que el inventario de la concursada al corresponder a 182,53 smlmv por lo que los honorarios del liquidador no podrán ser inferiores a 30 smlmv y superiores a 450 smlmv, los que deberán ser fijados en la audiencia que decida sobre la calificación y graduación de créditos e inventario valorado.

Dentro del traslado¹, ningún interviniente hizo manifestación alguna.

CONSIDERACIONES

Bajo lo previsto en el art. 318 del Código General del Proceso, el recurso de reposición tiene como objetivo que el Juez examine sus propios autos, ello con el fin de volver sobre el tema que aduce el impugnante, a fin de que se revoquen o se reformen en la perspectiva de corregir los yerros en que se pudo incurrir al proferirlos. Así las cosas, de acuerdo a las piezas procesales que militan en el expediente, desde ya se advierte que el recurso que aquí se decide no está llamado a prosperar por las razones que pasan a explicarse.

En cuanto al reproche elevado frente al numeral 2 del auto censurado, encontramos que aquel no tiene fundamento alguno puesto que si bien se advierte que en el archivo 17 milita el aviso elaborado por la Secretaría en cumplimiento de lo ordenado en el inciso 2 del ordinal 7 del auto del 17 de julio de 2019, lo cierto es que, tal y como se observa de su contenido, en la parte inicial se persiste en el error de señalar erróneamente el número de identificación de la concursada omitiendo la corrección adoptada por el Juzgado a través de

¹ Archivo 63

auto del 26 de enero de 2021, pues aquel corresponde a la C.C.52.535.491, mientras que allí se señaló “*QUE EN ESTE JUZGADO CURSA EL PROCESO LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA No. 110013103027-2013-00708-00 DE LA SEÑORA YENNE YAARLET NIZO GUACANEME EN LIQUIDACIÓN C.C. 52.035.491*”.

Obsérvese que ingresando al micrositio del Juzgado si bien se tiene que en el aparte de AVISOS del año 2021² ingresando través del link <https://www.ramajudicial.gov.co/documents/35088702/76339734/AVISO+272013-00708.pdf/9ce3bf43-82d1-4428-9c82-804eb6d38f08>, el aviso del trámite fue fijado, pues este tiene el yerro venido de advertir. Súmese a lo dicho que si bien a folio 46 milita informe de la liquidadora en donde allega una página del periódico el Espectador del 21 de febrero de 2021 donde indica dar acatamiento a la orden señalada por el Juzgado de la publicidad del aviso, de su contenido no se puede establecer que alguna corresponda a este trámite liquidatorio.

Y si eso es así, fácil es advertir que contrario a lo advertido por la impugnante dicha etapa no se encuentra superada y que la forma de subsanar tal yerro es emitiendo orden a la Secretaría para que realice uno nuevo y proceda a su publicación en debida forma.

Respecto a los reparos elevados contra el numeral **3**, se advierte que estos tampoco tienen viabilidad alguna. Si bien es cierto que en el auto del 26 de enero de 2021 donde se adoptaron determinadas decisiones tendientes a corregir yerros frente al número de cédula de la liquidada no se emitió orden en concreto para que se corrigiera el registro de la demanda en su registro mercantil, también lo es que tal orden si se encuentra contenida en el ordinal 5 del auto del 17 de julio de 2019, frente a la cual la Secretaría del Despacho procedió a la elaboración del oficio No. 0078 del 23 de enero de 2020 y que milita en el folio No. 482, del que obra firma de su retiro más no de su trámite por lo menos a la fecha en que fue emitido el auto recurrido.

De ahí que solamente hasta el 15 de marzo del año anterior³, obre respuesta emitida por parte de la Cámara de Comercio de Bogotá en donde informa haber procedido al registro de la providencia por medio de la cual se decretó la apertura del proceso de liquidación de la Sra. Nizo Guacaneme. Pese a tal información, tal entidad tampoco allegó oertificado de Cámara de Comercio para constatar de manera efectiva como fue inscrito el trámite.

Ante lo anterior, el Juzgado mantendrá la orden en el sentido de que la liquidadora deberá aportar certificado de Cámara de Comercio de la deudora y *solo en el evento* de que el registro de la demanda se advierta algún yerro relacionado con el número de identificación de esta conforme lo advertido en auto del 26 de enero de 2021, la Secretaría elaborará oficio dirigido a tal entidad para que proceda con las correcciones a que haya lugar.

Ahora, en cuanto los reparos formulados contra los numerales **5** y **6**, aquellos tampoco encuentran prosperidad alguna.

Lo primero que se advierte es que no hay lugar a estudio alguno en punto al reproche elevado frente a la orden de vincular al trámite al acreedor hipotecario Hernando William Vega Silva, por cuanto esta decisión fue adoptada por auto del 26 de enero de 2021 (archivo 12), la que se encuentra en firme y debidamente ejecutoriada dado que no fue presentado en su oportunidad reparo alguno. De ahí que debatirla en el término de ejecutoria del auto del 22 de febrero de 2022 resulta extemporánea.

En segundo lugar tememos que el estatuto procesal civil ha establecido un conjunto de cargas, cuyo cumplimiento siempre queda al arbitrio de quien la debe soportar, pero cuyo desatendimiento genera en la mayoría de los casos, sino lo es en todos, una consecuencia adversa a sus intereses, “... *como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e*

² <https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-50-civil-del-circuito-de-bogota>

³ Archivo No. 62

inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso”⁴, “dado que el sometimiento a las normas procedimentales o adjetivas, como formas propias del respectivo juicio, no es optativo para quienes acuden al mismo con el objeto de resolver sus conflictos jurídicos, en tanto que de esa subordinación depende la validez de los actos que de ellas resulten y la efectividad de los derechos sustanciales”⁵.

De ahí que, el art. 317 del Código General del Proceso establece dos (2) hipótesis para que proceda la declaratoria de desistimiento tácito, ante la inactividad de las partes dentro de un litigio: i) la que atañe al cumplimiento de una carga indispensable para continuar el trámite de para lo cual se establece un término de 30 días para su acatamiento; y, ii) cuando exista una inactividad del trámite en los términos indicados en el numeral 2 de esta disposición según tenga o no sentencia.

Ahora si bien la liquidadora indica que para esta clase de asuntos no son aplicables los requerimientos y sanciones de que trata la disposición procesal venida de señalar y para ello trae a cuento una sentencia proferida con anterioridad a la entrada en vigencia del actual estatuto procesal, la carga impuesta bajo los apremios de artículo 317 del C.G.P. se apoyo en pronunciamientos proferidos por la Sala Civil del Tribunal Superior de esta ciudad, que ha señalado “ (...)no está por demás señalar, que no existe dentro de la ley 1116 de 2006 o en ninguna otra disposición especial, la mención expresa según la cual el proceso de reorganización o liquidatorio, no sea plausible la sanción procesal en cuestión, y tampoco puede afirmarse que por su carácter liquidatorio pueda ser eximida del cumplimiento del deber legal de la parte interesada para su impulso; razones todas que llevan a concluir que la decisión proferida debe confirmarse, pues en últimas, se configuraron evidentes los presupuestos fácticos y jurídicos para la aplicación del artículo 317 del Código General del Proceso, máxime que este precepto de manera diamantina prevé que es aplicable al “...trámite de la demanda, del llamamiento en garantía, de un incidente o de cualquier otra actuación promovida a instancia de parte, se requiera el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado aquella o promovido estos, el juez le ordenará cumplirlo dentro de los treinta (30) días siguientes mediante providencia que se notificará por estado”⁶.

Mas recientemente en Sentencia STC8911 de 2020, la Corte Suprema de Justicia confirmó la posibilidad de aplicar esta figura a procesos liquidatorios siempre que exista carga en cabeza de las partes y no del juez cognoscente que impida el avance del asunto.

“En suma, mientras en el proceso en el que la inacción de las partes es evidente y para proseguirlo no es suficiente el impulso del juzgador, se ha dejado sentada la procedencia del desistimiento tácito, a menos que se afecten derechos inalienables, imprescriptibles y de interés prevalente, o se deje en vilo una comunidad o masa de bienes para cuya división solo sea esa la vía idónea para liquidarla, que son aspectos que deben evaluarse en cada caso específico por el juzgador.

Sin embargo, esta Corporación reitera que para decretar el desistimiento tácito, el juez cognoscente debe evaluar que además de su papel en la dirección del pleito, es necesario verificar la eficaz colaboración de las partes e intervinientes del proceso que evite su parálisis y con ello la congestión del despacho a su cargo, sobre cuya base deben adoptarse las determinaciones que juzgue pertinentes”

Entonces dado que aún persisten cargas impuestas a la liquidadora designada y estas han cobrado ejecutoria, es menester se satisfagan, de ahí la exigencia de que se cumplan en el plazo contenido en la norma procesal y desde esta perspectiva viable resulta que a efectos de darle impulso y curso al proceso se exhortara a la liquidadora a que notificara en debida forma a la concursada, y que esta a su vez acatara la orden contenida en auto del 17 de julio

⁴ Cfr. Sala de Casación Civil, M.P. Dr. Horacio Montoya Gil, auto del 17 de septiembre de 1985, que resolvió una reposición, Gaceta Judicial TOMO CLXXX – No. 2419, Bogotá, Colombia, Año de 1985, pág. 427.

⁵ Cfr. Corte Const., sent. 1512, 8-11-2000. M. P.: Dr. Álvaro Tafur Galvis.

⁶ Radicado No.11001310302420130013401 Concordato Ingrid del Carmen Peñalosa Fuentes M.P. JULIA MARIA BOTERRO LARRARTE.

de 2019, esto es, rindiera cuentas.

Finalmente, en cuanto a la impugnación sobre los honorarios fijados en el numeral **8**, tenemos que el artículo **2.2.2.11.7.4. del decreto 1075 de 2015**⁷ señala en relación con la remuneración del liquidador que *“En la misma audiencia o providencia que decida sobre la calificación y graduación de créditos y el inventario valorado, el juez del concurso fijara los honorarios totales del liquidador, sin perjuicio de los incrementos en caso de que se enajenen activos por valor superior al del avalúo o de los ajustes por aparición de nuevos bienes que ingresen por la aprobación de inventarios adicionales.”*

De lo que colige que solo hasta la audiencia que resuelva sobre la clasificación, graduación de créditos e inventario de bienes, podrá el Juzgado atendiendo los parámetros señalados en la norma venida de indicar fijar los honorarios definitivos a reconocer a favor de la liquidadora, lo que en nada impide que estos hayan sido fijados de manera parcial como se hizo en el auto censurado, valorando la gestión realizada hasta el momento por ella, pues como allí se indicó los mismos se establecieron solo hasta que quede en firme la calificación y graduación de créditos e inventario de bienes del deudor, se determinar la remuneración adicional al valor ya fijado.

Así las cosas, el Juzgado confirmara en su integridad el auto objeto de recurso. Por lo expuesto, el Juzgado **RESUELVE:**

1. CONFIRMAR por las razones venidas de señalar en su integridad el auto fechado el 22 de febrero de 2022.

2. En consecuencia y a fin de continuar el trámite:

i) Por Secretaría dese cumplimiento a la orden contenida en el numeral 2 del auto venido de señalar, dejando en el expediente las advertencias a que haya lugar.

ii) Contabilícese el término indicado en el numeral 3, a fin de que se allegue certificado por pare de la liquidadora de la Cámara de Comercio y una vez este sea aportado, solo en el evento en que se evidencie que fue inscrita la demanda con el error en cuanto al número de cédula de la concursada, **y sin necesidad de que el expediente ingrese al Despacho**, ofíciese nuevamente a dicha entidad para que proceda a la corrección a que haya lugar.

iii) Contabilícese también por la Secretaría el término otorgado en el numeral 5 únicamente en lo que respecta a notificar al acreedor hipotecario, puesto que como se dispone en auto aparte ya la persona liquidada fue enterada del trámite. Así mismo compútese el término señalado en el numeral 6.

iv) **Cumplido todo lo anterior se resolverá relativo al inventario de bienes y proyecto de calificación y graduación de derechos de voto, traídos por la liquidadora.**

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PILAR JIMÉNEZ ARDILA
JUEZ
(2)

JST

⁷ "Por medio del cuál se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo".

Firmado Por:
Pilar Jimenez Ardila
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 050
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **b198cb5488dca730256bb9cdcefeddf2bf978321207278a5e45b0accb00d6573**

Documento generado en 18/04/2023 04:45:33 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>